



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-021-2020-00032-01 (O2-22-075)  
**Accionante:** IRMA ROCIO MARÍN FRANCO  
**Accionada:** AFP PORVENIR S.A. Y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
**Procedencia:** JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No. 0022  
**Asunto:** INTERESES MORATORIOS - FALTA DE PAGO BONO PENSIONAL

En Medellín, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-021-2020-00032-01 (O2-22-075), instaurado por IRMA ROCÍO MARÍN FRANCO en contra de AFP PORVENIR S.A. Y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la parte actora, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 28 de febrero de 2022 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### 1. ANTECEDENTES

La señora IRMA ROCÍO MARÍN FRANCO actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad AFP PORVENIR S.A. y LA NACIÓN –

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en lo sucesivo, MINHACIENDA, a efectos de que se condene a la sociedad AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar los intereses moratorios contenidos en el artículo 12 del Decreto 1748 de 1995, modificado por los Decretos 1474 y 1513, ambos de 1998; sanción de mora que solicita se conceda a partir del 30 de septiembre de 2018, y hasta la fecha que efectivamente fue entregada la devolución de saldos a su favor. De manera subsidiaria, reclama la indexación de las sumas reconocidas.

En respaldo de sus aspiraciones señala que se encuentra afiliada el RAIS administrado por la AFP PORVENIR S.A., obrando en su cuenta de ahorro individual – CAI, la suma de \$51.491.073,00. Refiere que el 30 de agosto de 2016, presentó ante la AFP PORVENIR S.A., solicitud con miras a obtener la devolución de saldos que se encontraran acreditados en su CAI, incluyendo el valor del bono pensional; sin embargo, dicha solicitud solo fue atendida en el año 2018, particularmente los días 12 de marzo y 12 de septiembre de esa anualidad, lo que a su juicio causa a su favor y a cargo de la AFP PORVENIR S.A., los intereses de mora deprecados, al haber desbordado en exceso el término de un mes para el pago de la devolución de saldos solicitada.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La demanda se admitió el 11 de marzo de 2020 (doc.04, carp.01), y se notificó a la demandada AFP PORVENIR S.A., el 22 de octubre de esa anualidad (doc.05, carp.01), la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, negando la veracidad de la narración de los hechos expuesta por la promotora de la litis. En su defensa, propuso con el carácter de dilatoria, la excepción de falta de integración del litis consorcio necesario, y como perentorias, las que individuó como inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, hecho exclusivo de un tercero, buena fe de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías PORVENIR S.A., prescripción, compensación y la innominada (doc.06, carp.01).

Dentro del trámite judicial, el juzgado en auto del 04 de agosto de 2021 (doc. 08, carp.01) dispuso la integración de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO al juicio, cartera ministerial que también se opuso a la prosperidad de los pedimentos (doc.10, carp.01), sin constarle ninguno de los hechos contenidos en el escrito inaugural. Como sustento de su oposición, formuló las excepciones de mérito que nominó como buena fe y la genérica.

### **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 28 de febrero de 2022 (docs.15 y 17, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió absolver a las demandadas AFP PROTECCIÓN S.A. y MINHACIENDA de las pretensiones impetradas en su contra por parte del promotor, al declarar probada *la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con la AFP PORVENIR, y PAGO, en relación con la actualización del bono pensional reclamado como pretensión subsidiaria*, gravando en costas a la demandante.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de explicar el contenido y alcance del artículo 12 del Decreto 1748 de 1995, concluyó que solo el emisor y el cuotapartista del bono pensional, son quienes están llamados a reconocer y pagar los intereses moratorios. Así, señaló que, para el caso de la demandante, el emisor corresponde a MINHACIENDA, mientras que, el municipio de Nariño, ostenta la calidad de contribuyente o cuotapartista; entidad territorial que, además de haber cumplido con el pago de la cuota parte que le corresponde dentro del término legal, esto es, el 27 de noviembre de 2016, no fue convocada a la litis, y siendo ello así, no puede ser condenada el pago de intereses de mora.

Siguiendo con la sustentación de la decisión absolutoria, frente a la responsabilidad del emisor del bono pensional a instancia de MINHACIENDA como emisor del bono pensional, autorizó y reconoció el bono pensional de la promotora del juicio el 24 de agosto de 2018, una vez la AFP PORVENIR S.A., el 31 de julio de 2018, radicó la solicitud con el lleno de los requisitos legales; destacando que la redención anticipada del bono pensional, como lo es el caso bajo estudio, está sujeta a la solicitud radicada por el fondo de pensiones. De allí que, no resulta procedente, ante la inexistencia de la dilación en la emisión del bono pensional, la condena de los intereses de mora a los que aspira la accionante.

Asimismo, sostuvo que si bien la AFP PORVENIR S.A. no es la entidad encargada de emitir o contribuir en la conformación del bono pensional, también lo es que, conforme con lo señalado en el artículo 20 del Decreto 656 de 1994, debe adelantar, por cuenta del afiliado, pero sin ningún costo para éste, *las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad*, reiterando, no obstante, que dentro de las consecuencias del incumplimiento de este deber, no se encuentra el pago de intereses de mora, los que reitera, solo proceden a cargo del emisor y el contribuyente del bono pensional.

Finalmente, desestima la indexación del bono pensional solicitado, al considerar que conforme se desprende del artículo 15 Decreto 3798 de 2003 este mecanismo de financiación pensional *se actualizará y capitalizará desde la fecha de corte hasta la fecha de la última cotización efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y actualizado desde esta fecha hasta aquella en que se expida la resolución que ordena el pago*; situación que impide fulminar condena por la indexación solicitada por comportar ello doble pago (minuto 01:54 a 21:56, doc.17, carp.01).

### **1.3. Recurso de Apelación**

El procurador judicial de la señora IRMA ROCÍO FRANCO MARÍN inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, dirigido a que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se acceda al reconocimiento de los intereses de mora solicitados en el escrito genitor.

Con tal propósito recordó que, la solicitud de devolución de saldos se radicó en agosto de 2016, por lo que a la fecha de su pago, en el año 2018, ya había transcurrido más del término legalmente establecido; imputando la dilación en cabeza de la AFP PORVENIR S.A., entidad que canceló la solicitud radicada ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solo para ser presentada nuevamente en el año 2018 con idénticos documentos soporte, circunstancia que sustenta con la documental arrimada al expediente y de la contestación a la demanda, insistiendo con ello en el reconocimiento de los intereses de que trata el artículo 2.2.16.1.12 del Decreto 1833 de 201 (minuto 00:25 a 07:43, doc.18, carp.01).

### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

El recurso de apelación se admitió el 14 de marzo de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 22 de del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 el Decreto Legislativo 806 de 2020 –vigente para la época-, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

La vocera judicial de la AFP PORVENIR S.A. (doc.04, carp.02), presentó alegaciones pertinentes afirmando que *resulta acertada la decisión del fallador de primera instancia, de absolver a las demandadas en este proceso, pues las mismas carecieron de legitimación en la causa para responder por lo que solicitó la demandante, pues tal y*

*como lo adujo el a quo, las entidades codemandadas cumplieron con las obligaciones impuestas por ley, sin encontrarse vinculado al proceso, las entidades que efectuaron el retardo en el reconocimiento y pago del bono pensional al que hubo lugar, esto es, el Municipio de Nariño y a la Gobernación de Antioquia, razón por la cual se absolvió a las codemandadas.* Prosigue indicando que, si en gracia de discusión se concedieran los intereses de mora solicitados por la actora, estos deben estar a cargo de la entidad que reconoció y pagó el bono pensional.

La demandante y MINHACIENDA guardaron silencio durante el término de traslado que les fuera otorgado.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora IRMA ROCÍO FRANCO MARÍN, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

### **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si a la demandante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora de que trata el artículo 12 del Decreto 1748 de 1994, compilado en el artículo 2.2.16.1.12 del Decreto 1833 de 2016, para lo cual se determinará **i.** la definición, conformación y redención de los bonos pensionales; **ii.** los sujetos que intervienen en la autorización y emisión de los bonos pensionales; **iii.** los términos legales para el pago de los bonos pensionales, y; **iv.** las consecuencias derivadas del incumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la materia.

### **2.2. Sentido del Fallo**

La Sala confirmará la decisión de primer grado, considerando que la interpretación plausible del Decreto 1748 de 1994, compilado en el Decreto 1833 de 2016, no impone en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones, el reconocimiento y pago de los intereses de mora a la tasa efectiva anual; sanción que, conforme con el artículo 2.2.16.1.22 del citado Decreto 1833 de 2016, solo es atribuible al emisor o al responsable de cuota parte del bono

pensional; calidad que no detentan las administradoras del régimen individual con solidaridad, entidades que por el contrario, y, por expresa disposición legal, son sujetos de otras medidas sancionatorias por el incumpliendo del plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensional.

### 2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que la señora IRMA ROCÍO FRANCO MARÍN nació el 26 de mayo de 1959 (pág.10, doc.03, carp.01), que se vinculó al RAIS representado por la AFP PORVENIR S.A. el 13 de abril de 1994 (pág.23, doc.06, carp.01); que efectuó cotizaciones al RAIS de manera interrumpida durante el lapso comprendido entre mayo de 1994 y diciembre de 2012 (págs.24 a 34 y 44 a 47, doc.06, carp.01); que el 30 de agosto de 2016 presentó solicitud de reconocimiento de la devolución de saldos (pág.36, doc.06, carp.01); que el 07 de septiembre de 2016 y el 12 de septiembre de 2018, la AFP PORVENIR S.A., reconoció, en su orden y a favor de la accionante las sumas de \$13.409.433 y \$40.877.921, a título de devolución de saldos (págs.52 y 75, doc.06, carp.01); y que el 27 de noviembre de 2016 el Municipio de Nariño reconoce bono pensional a favor de la accionante y se autoriza el pago con cargo a los recursos que el municipio cuenta en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET (págs.21 a 22, doc.06, carp.01);

Adicionalmente, no se discute que la opositora MINHACIENDA, a través de la Oficina de Bonos Pensionales, en Resolución 18398 del 24 de agosto de 2018 emitió y ordenó el pago del Bono Pensional a cargo de la Nación de la señora IRMA ROCÍO FRANCO MARÍN como afiliada al RAIS (págs.15 a 20, doc.10, carp.01).

Siendo ello así, memora la Sala que la promotora de la Litis ubica como punto nodal del disenso la mora injustificada por parte de la codemandada AFP PORVENIR S.A. en la gestión y ulterior trámite de la emisión y pago del bono pensional del que es titular, recordando que a pesar de encontrarse radicada la solicitud de devolución de saldos, el bono pensional solo fue pagado en el año 2018.

### **2.3.1.1 Bonos pensionales tipo A: conformación y redención.**

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 115 de la Ley 100 de 1993 y 1° del Decreto 1299 de 1994, *[l]os bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones*, y por tanto constituyen, a la par de los aportes obligatorios en el SGSSP, los recursos necesarios para el financiamiento de la prestación pensional. Es así, que conforme con los lineamientos consagrados en el SGSS<sup>1</sup>, estos bonos pensionales son instrumentos de deuda pública nacional, que son expedidos a los afiliados para los fines arriba anotados por parte **a.** la Nación; **b.** las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, y; **c.** por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora<sup>2</sup>.

Así, para el caso de los afiliados que se trasladen del RPMPD al RAIS y que acrediten a la fecha de dicho traslado haber cotizado al menos 150 semanas<sup>3</sup>, tendrán derecho a la emisión

<sup>1</sup> **Ley 100 de 1993, artículo 121. Bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación.** La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, de la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera otra Caja, Fondo o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades. Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha.

<sup>2</sup> Ley 100 de 1993, artículo 118.

<sup>3</sup> **Decreto 1299 de 1994, artículo 2, parágrafo 1°.** Los afiliados de que trata el literal a del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas continuas o discontinuas, no tendrán derecho a bono. Para efecto de contabilizar las semanas previstas en el presente parágrafo se tendrá en cuenta, la suma del tiempo durante el cual el trabajador estuvo cotizando al ISS, a alguna caja o fondo de previsión del sector público, prestando servicios como servidor público, vinculado mediante contrato de trabajo a una empresa o empleador del sector privado que tenía a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, o afiliado a una caja o fondo de previsión del sector privado.

del bono pensional identificado como “Bono tipo A”, el que dicho sea de paso, cuenta con dos modalidades, de acuerdo con la fecha donde se verifique su primera vinculación laboral. De tal manera que los bonos tipo A de modalidad 1, serán aquellos que *se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 1992<sup>4</sup>, a contrario sensu, los de modalidad 2, se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1o. de julio de 1992<sup>5</sup>.*

### **2.3.1.2 Bonos pensionales tipo A: sujetos que intervienen en la autorización y su emisión.**

Conforme con lo normado por los artículos 119 de la Ley 100 de 1993 y 14 y 15 del Decreto 1299 de 1994, los principales actores o sujetos que participan en la emisión de bonos pensionales tipo A, corresponden al emisor y al contribuyente. Ahora, como anticipara la Sala en líneas anteriores, se entiende por emisor a **i.** la Nación; **ii.** la administradora del RPMPD<sup>6</sup>; **iii.** las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional; **iv.** empresas privadas o públicas, o cajas o fondos de previsión del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, y; **v.** las Cajas, fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.

A su turno, los contribuyentes son aquellas *entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado el beneficiario del bono pensional*, las que deberán *contribuir a la entidad emisora con la cuota parte correspondiente al valor de redención del mismo<sup>7</sup>.*

En línea con lo anterior y a pesar de no intervenir de manera directa en la emisión y pago del bono pensional tipo A, deviene incontrovertible que los empleadores privados o públicos<sup>8</sup>, el afiliado y la administradora del RAIS, también prestan su colaboración dentro de este trámite, *verbi gratia*, con la expedición del certificado de tiempo de servicios y salarios devengados, la

<sup>4</sup> Decreto 1748 de 1995.

<sup>5</sup> Ibid. Decreto 1299 de 1994, artículo 14.

<sup>6</sup> Decreto 1299 de 1994, artículo 17. El instituto de Seguros Sociales emitirá el bono pensional de los afiliados al Sistema General de Pensiones en relación con sus afiliados que hubiesen ingresado por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 1o. de abril de 1994.

<sup>7</sup> Decreto 1299 de 1994, artículo 15.

<sup>8</sup> **Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.2.1.6.** Cuando un empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, especificará lo siguiente: a) Nombre del trabajador, tipo y número de su documento de identidad; b) Número o números de afiliación ante el ISS, si es el caso; c) Razón social del empleador, NIT, y número patronal ante el ISS, si es el caso; d) Nombre y NIT de la caja o fondo de previsión a la cual aporta o aportaba, si es el caso. Si hubo más de una, especificar fecha; e) Fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para el empleador. f) Fechas de ingreso y retiro; g) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones; h) Salario a 30 de junio de 1992, si estaba activo a esa fecha; i) Salario a la fecha de desvinculación, si ésta fue anterior al 30 de junio de 1992; j) Salario a la víspera de la fecha de iniciación de la licencia no remunerada o suspensión, y cuál fue esta fecha, si el 30 de junio de 1992 se hallaba suspendido o en licencia no remunerada; k) Salarios devengados y número de días laborados, mes por mes, si la vinculación ocurrió después del 30 de junio de 1992; l) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo; m) Nombre y documento de identificación de la persona que expide la certificación.



aprobación de la historia laboral, y en el caso de las AFP, como el principal interlocutor entre el afiliado y las entidades responsables en la emisión y pago de la cuota parte del bono, pues conforme con lo señalado en el artículo 20 del Decreto 656 de 1994 y 2.2.16.2.1.6 del Decreto 1833 de 2016, debe adelantar por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención.

En síntesis, en la gestión y el trámite de expedición del bono pensional, participan además del emisor y el contribuyente, el afiliado, los empleadores públicos o privados a los cuales les prestó servicios y la AFP a la que se encuentra vinculado; cada uno con responsabilidades y deberes específicos y claramente diferenciables<sup>9</sup>.

### **2.3.1.3 Bonos pensionales tipo A: términos legales para su pago y consecuencias derivadas de su incumplimiento.**

Previo a determinar el plazo legalmente establecido para la emisión del bono pensional tipo A, necesario se muestra identificar las modalidades y los momentos de redención que el legislador ha establecido, para así conocer puntualmente el hito a partir del cual se hace exigible el pago de estos recursos y con ello, las sanciones por incumplimiento del término legalmente concedido para tal propósito.

En línea con lo anterior, el artículo 11 del Decreto 1299 de 1994, indica que *[e]l bono pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional; 2. Cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia; 3. Cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993;* normatividad cuya intelección se orienta con lo estatuido por los artículos 2.2.16.2.1.1, 2.2.16.1.20 y 2.2.16.1.21 del Decreto 1833 de 2016, que fijan como fecha normal del redención del bono, aquella cuando el beneficiario del bono

<sup>9</sup> **Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.7.4. Entidades administradoras.** a) El ISS respecto de los bonos tipo B; b) La AFP a la cual esté afiliado el trabajador, respecto a los bonos tipo A, y; c) Las compañías de seguros, en el caso de los planes alternativos de pensiones. Corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención. Las administradoras estarán obligadas a verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, de tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, sólo sea necesario proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento de las cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52. Así mismo, el afiliado también podrá solicitar directamente las certificaciones, las cuales deberán ser previamente verificadas por la administradora. Las entidades administradoras quedan eximidas de allegar certificaciones, y el empleador de suministrarlas individualmente, cuando el bono vaya a ser calculado por la OBP, siempre que la información esté incluida en el último archivo laboral masivo que se haya entregado a esta oficina, salvo cuando el trabajador solicite expresamente una certificación individual más amplia. Las entidades empleadoras deberán establecer un procedimiento interno de emisión de certificaciones que permita su verificación y garantice su seguridad. El procedimiento deberá contener al menos los siguientes aspectos: a) La entidad deberá numerar las certificaciones expedidas; b) Las certificaciones expedidas deberán registrarse en un archivo interno de la entidad; c) El representante legal de la entidad deberá designar, bajo su responsabilidad, un funcionario competente para la emisión de certificaciones. Así mismo, los destinatarios de la información podrán solicitar al representante legal el nombre y documento de identidad de los funcionarios que hubieran estado facultados para expedir las certificaciones ya recibidas. Las Administradoras deberán mantener en sus archivos, utilizando los medios idóneos que garanticen su conservación, las diferentes certificaciones que sirvieron de base para las solicitudes de bono pensional que realizaron a los emisores. El emisor podrá solicitarlas en cualquier momento. Dichos documentos deberán conservarse por lo menos durante veinte (20) años contados a partir de la expedición del bono pensional."

cumple 62 años de edad si es hombre, o 60 si es mujer; la fecha cuando se alcanzó 500 semanas después de la fecha de corte<sup>10</sup>, *si a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones el beneficiario del bono tenía 55 o más años de edad si es hombre, o 50 o más si es mujer*, o bien la fecha en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo que trabajara ininterrumpidamente a partir de fecha de corte.

Al momento que se solicite la devolución de saldos, el abundante compendio normativo que regla la materia, califica esta redención como anticipada, siempre y cuando *no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario*<sup>11</sup>; distinción que resulta relevante, toda vez que en este último caso y por razones lógicas, la redención anticipada del bono se efectúa previa solicitud de parte del fondo de pensiones, mismo que debe dar cuenta de la causal de redención a la que se acude.

Efectuadas las anteriores precisiones, establece el artículo 2.2.16.1.22 del Decreto 1833 de 2016 que *[e]l emisor pagará el bono a su legítimo tenedor dentro del mes siguiente a la fecha en la cual reciba de éste la solicitud de pago en la forma que el emisor haya establecido. Para los bonos tipo A con redención normal no se requiere solicitud y se pagarán dentro del mes siguiente a FR*; de no cumplirse este plazo, el emisor<sup>12</sup> o el contribuyente<sup>13</sup>, deberá, según corresponda, reconocer de manera automática y a título de sanción, intereses de mora a partir de la fecha límite, a la tasa establecida en la fórmula contenida en el artículo 2.2.16.1.12 ídem.

### 2.3.2 Del Caso Concreto

Revisado entonces los medios de convicción que fueran adosados en el acontecer judicial, se colige que a la impulsora de juicio le asiste derecho al reconocimiento de un bono pensional tipo A, en la medida en que, además de haber efectuado para el mes de abril de 1994, un traslado de RPMPD al RAIS, contaba a esa data con más de 150 semanas cotizadas (págs.23, 40 a 43, 71 y 73 a 74 doc.06, capr.01). Asimismo, probado se tiene que la redención de este bono debe ser en la modalidad de anticipado, pues la solicitud obedece al interés en el reconocimiento de una devolución de saldos, la que dicho sea de paso, fue radicada el 30 de

<sup>10</sup> Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.1.13. Determinación de la fecha de corte, FC. **1. La fecha de corte, FC, será: a) Para bonos tipo A, la fecha de traslado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.** b) Para bonos tipo B, la fecha de traslado al ISS.

<sup>11</sup> Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.1.21. Redención anticipada de los Bonos. Habrá lugar a la redención anticipada de los bonos cuando se dé una de las siguientes circunstancias: 1. Para bonos tipo A que no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario, o bien la devolución del saldo en los casos previstos en los artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de 1993

<sup>12</sup> La Nación, la administradora del RPMPD, las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional; las empresas privadas o públicas, o cajas o fondos de previsión del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, y las Cajas, fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.

<sup>13</sup> Entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado el beneficiario del bono pensional, las que deberán contribuir a la entidad emisora con la cuota parte correspondiente al valor de redención del mismo

agosto de 2016 (págs.35 y 36, doc.06, carp.01); momento a partir del cual la AFP debía dar inicio a las gestiones ante el emisor y el contribuyente del bono pensional a fin de obtener su pago, estableciendo *dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes la historia laboral del afiliado con base en los archivos que posea y la información que le haya sido suministrada por el afiliado*; y solicitando *a quienes hayan sido empleadores del afiliado, o a las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere cotizado, que confirmen, modifiquen o nieguen toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono*<sup>14</sup>; no estando sujeta ni al término ni a las sanciones contempladas en el 2.2.16.1.22 del Decreto 1833 de 2016, pues sin el ánimo de ser reiterativo, las consecuencias por la infracción de esta disposición, incumbe de manera exclusiva y excluyente, al emisor y al contribuyente del bono, mas no a los demás sujetos que participan en su trámite.

De lo hasta aquí discurrido, de cara al marco jurídico fijado por la parte actora en el recurso de alzada, es dable afirmar por esta Sala de Decisión, sin ambages, que la decisión adoptada por el juzgador de instancia se estima acertada, toda vez que, evidente se muestra que la parte accionante no cuestiona la conducta desplegada por el emisor ni por el contribuyente del bono pensional, sino que por el contrario, su esfuerzo está dirigido a obtener el pago de intereses moratorios a la convalidada AFP PORVENIR S.A., sanción que resulta ajena e impertinente, conforme con la responsabilidad y el rol que detenta esta administradora dentro de este trámite; pues de comprenderse así el asunto, se estaría entregando una patente de corso para el establecimiento, *de facto*, de un régimen sancionatorio ecléctico y acomodaticio que responda a los intereses y a la conveniencia de cada afiliado, resultando por tanto inane por razones de pertinencia auscultar si la AFP incurrió o no en una dilación injustificada en la presentación de la solicitud ante el emisor del bono pensional, por la irrefutable improcedencia de los intereses de mora que deprecia la pretensora.

Como colofón de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a las demandadas AFP PORVENIR S.A. y MINHACIENDA, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora IRMA ROCÍO FRANCO MARÍN.

## 2. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y advirtiéndose que el recurso de apelación interpuesto por IRMA ROCÍO FRANCO MARÍN no salió avante, a su cargo se impondrán costas procesales. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA 16-

---

<sup>14</sup> Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.7.8.

10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho a cargo de la demandante, y en favor de las accionadas de manera proporcional, la suma de medio SMMLV equivalente a \$ 580.000,00.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **3. RESUELVE**


**PRIMERO:** CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por IRMA ROCÍO FRANCO MARÍN, en contra de la AFP PORVENIR S.A. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a cargo IRMA ROCÍO FRANCO MARÍN fijándose como agencias en derecho, en favor de la AFP PORVENIR S.A. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, la suma de un SMMLV equivalente \$1.160.000,00, pagadera en un 50% de ese valor para cada una de ellas.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES  
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario